



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
CHIAPAS



Juicio Contencioso Administrativo

Expediente: 559/2020

Actor: [REDACTED]

Autoridad demandada: presidente del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Acto administrativo impugnado: Resolución de 26 de junio de 2019, emitida por el presidente del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el procedimiento HACTG/CM/DRQyD/[REDACTED]/2016.

Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cuatro de octubre de dos mil veintidós.

Visto, para resolver, los autos del expediente 559/2020, formado con el Juicio Contencioso Administrativo interpuesto por [REDACTED] en contra de la resolución pronunciada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve por el presidente del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el procedimiento administrativo HACTG/CM/DRQyD/[REDACTED]/2016 que lo inhabilitó temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal por un lapso de tres años.

Resultando

1. La resolución pronunciada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve por el presidente del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el procedimiento administrativo HACTG/CM/DRQyD/ [REDACTED] 2016, que inhabilitó temporalmente al presunto responsable [REDACTED] para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal por un lapso de tres años, es el acto administrativo impugnado en nulidad.

2. [REDACTED] impetró la nulidad de esa resolución a través del juicio contencioso administrativo, mediante escrito receptado el veintisiete de enero de dos mil veinte.

3. El día uno de octubre de ese año se admitió la demanda y se ordenó correr traslado y emplazar a la autoridad demandada.

4. La licenciada Karla Burguete Torrestiana, en su carácter de presidenta interina del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante escrito receptado el trece de agosto de dos mil veintiuno, contestó la demanda en tiempo y forma, tal y como consta en el auto dictado el día diecinueve de ese mes.

5. Integrada la litis con la demanda y la contestación de la demanda, el nueve de mayo de dos mil veintidós se abrió el juicio a prueba. Una vez precluido el periodo de desahogo, el uno de agosto siguiente se pasó a la etapa de alegatos.

6. Al no existir documentos que requerir, ni diligencias por desahogar, el día quince de agosto del año que transcurre se



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO CHIAPAS

declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de sentencia; la que ahora se pronuncia.

Considerando

I. Mediante Decreto número 35, publicado el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, "por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de administración de justicia e integración del Poder Judicial del Estado de Chiapas" se creó el Tribunal Administrativo como un órgano integrante del Poder Judicial del Estado de Chiapas, dotado de plena autonomía para dictar sus resoluciones y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y en su caso, recursos en contra de sus resoluciones, quien reasume jurisdicción del presente asunto, a través del Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa, para pronunciar la sentencia definitiva. Asimismo, por acuerdo general 2/2020 de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se determinó otorgar competencia a este Juzgado para conocer de juicios contenciosos administrativos. Se puso de relieve, que el acuerdo se tomó a efecto de privilegiar el acceso a la justicia de las partes, porque al distribuirse la carga de los expedientes entre el Juzgado Especializado en Responsabilidades y el de Jurisdicción Administrativa, habrá mayor atención a sus procesos y agilidad en las resoluciones, sin que esto se traduzca en una violación legal, porque el artículo 79, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, dota al

Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización y funcionamiento; con esa determinación, goza de facultades para emitir las disposiciones que se requieran, a fin de cumplir sus atribuciones, sin que dicho acuerdo implique una trasgresión al principio de jerarquía normativa, porque se trata de una medida temporal que cumple con la exigencia prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de administración justicia pronta y expedita.

II. Tomando en cuenta que los argumentos de agravios son extensos, no se transcribirán, únicamente se hará un resumen de ellos. Esta determinación se toma sin demérito de los principios de exhaustividad y congruencia, puesto que se dará respuesta cabal a los planteamientos que contienen, al menos que uno de ellos resulte fundado y trascendente para eludir el estudio de los demás. Esto se hace con apego al precepto 156 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la entidad que prevé que las sentencias se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del demandante que se deduzca en su demanda en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios y a lo dispuesto en el numeral 157, del mismo compendio, que no impone la obligación de transcribir los agravios; únicamente faculta a examinar en su conjunto, a estos y a las causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

Para robustecer esta determinación se invoca, por analogía jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada

en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; registro digital: 164618; tomo XXXI, Mayo de 2010; página 830; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la que fue publicada con la redacción que enseguida se transcribe:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin perjuicio de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

III. El artículo 156, segundo párrafo, de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas dispone que, en las sentencias, cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, deberá examinarse en primer lugar, aquellas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Esta porción normativa conduce a este órgano jurisdiccional a analizar el *segundo concepto de*

nulidad; aquel en el que el accionante alega que debe proceder la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada porque, al momento de su emisión, ya había prescrito la facultad sancionadora de la autoridad responsable.

Se procede entonces al estudio del **segundo concepto de agravio**. En éste el impetrante argumenta, en resumen, que en el marco de lo dispuesto en el artículo 75, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, la facultad sancionadora de la autoridad demandada ya estaba prescrita al momento de dictar la resolución el día veintiséis de junio de dos mil diecinueve en el procedimiento administrativo HACTG/CMDRQyD [REDACTED] 2016.



Pone de relieve que la Autoridad demandada expuso en la resolución que la conducta que le reprochan no generó un daño o perjuicio al Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, porque la omisión en que incurrió no es estimable en dinero.

Precisa que, al estimarlo así la propia Autoridad demandada, la infracción que se le imputa como presunto responsable se ubica en las fracciones I y II del numeral mencionado, porque al haber causado baja el treinta de septiembre de dos mil quince y haberse dictado la resolución el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la que le fue notificada hasta el veintisiete de noviembre de ese año, los plazos con que contaba su contraparte para sancionarlo, contenidos en las fracciones I y II del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, fueron superados.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
CHIA PAS



Los conceptos de nulidad que se analizan son fundados, en mérito a las siguientes consideraciones:

La aplicación de sanciones es una facultad que se extingue cuando se actualiza la prescripción de ejercerla prevista en la Ley.

La figura jurídica de la prescripción representa una autolimitación que el propio Estado se impone para el ejercicio de la función sancionadora que tiene encomendada, debido a que dicha atribución de la autoridad también representa una garantía a favor del servidor público, pues con la existencia de la prescripción subsiste la posibilidad de que éste no sea infraccionado una vez que transcurrió el plazo previsto en la Ley, al desaparecer el derecho del Estado para perseguir y sancionar una conducta específica y determinada y, además, procede declararla oficiosamente si no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, entre las cuales se encuentran la vigencia y oportunidad de su iniciación y trámite porque se vulneran los derechos humanos de la persona sujeta a investigación, lo que lo hace una figura procesal de estudio preferente y oficioso.

Ahora bien, la resolución impugnada hace prueba plena en términos del artículo 153, fracción I, de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, por contener hechos legalmente afirmados por la propia autoridad demandada y es útil para sostener que se acredita, por así reconocerlo el disidente en su escrito de expresión de agravios, que la

irregularidad que se le imputa como presunto responsable es no haber formalizado el Acta de entrega-recepción y formatería del proceso de entrega de los asuntos correspondientes a la Secretaría de Obras Públicas Municipales dentro del término previsto en el artículo 45, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas.

Es útil también para establecer que el dieciséis de octubre de dos mil trece el disconforme fue dado de alta como titular de esa Secretaría y que causó baja el treinta de septiembre de dos mil quince.



Asimismo, también prueba que la Autoridad demandada, en el apartado de rubro "VII.- EL MONTO DE BENEFICIO, DAÑO O PERJUICIO ECONÓMICO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES" señaló literalmente:

"De las constancias procesales se desprende que la conducta que se reprocha no ha generado un daño o perjuicio al H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; pues con la omisión en que incurrió el servidor público sujeto a procedimiento no es estimable en dinero."

Lo expuesto permite sostener lo siguiente:

En términos del artículo 45, fracción III, segundo párrafo, de la abrogada Ley de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos, el presunto responsable [REDACTED], al haber causado baja el treinta de septiembre de dos mil quince, debió realizar la entrega de los recursos materiales, financieros y humanos, que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones hasta 15 días después de haberse separado o asumido un empleo,

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO CHIAPAS

cargo o comisión; esto es, hasta el quince de noviembre de ese año. Para robustecer esto se transcribe esa porción normativa;

"Artículo 45...

[...]

III. los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ejercer las facultades que le sean atribuidas y emplear la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que están afectos;

Todo servidor público está obligado a realizar la entrega o recepción de los recursos materiales, financieros y humanos, que le son asignados para el desempeño de sus funciones, hasta 15 días después de haberse separado o asumido un empleo, cargo o comisión."

En consecuencia, al establecer el artículo 75, en sus fracciones I y II, de esa Ley¹, que las facultades del Superior Jerárquico y de la Secretaría de la Función Pública para imponer las sanciones Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado y que en los demás casos prescribirán en tres años. Al reconocer la propia Autoridad demandada que la conducta que le reprocha al presunto infractor no generó un daño o perjuicio al Ayuntamiento

¹ "Artículo 75. Las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría General para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente:

I. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces al salario mínimo diario vigente en el estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo, y

II. En los demás casos prescribirán en tres años."

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, porque la omisión en que incurrió no es estimable en dinero; se arriba a la conclusión que, al no haber hecho el actor la entrega de los recursos materiales, financieros y humanos, que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones hasta el quince de noviembre dos mil quince (plazo que tuvo para hacerlo en términos del artículo 45, fracción III, segundo párrafo de la Ley que se comenta) el plazo de tres años con que contó la Autoridad demandada para sancionarlo feneció el quince de noviembre de dos mil dieciocho. Por lo tanto, al momento en que la sentencia administrativa impugnada fue notificada al actor: el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, la facultad sancionadora de la Autoridad ya había prescrito.

Cabe hacer notar, que se toma como referencia la fecha de la notificación de la resolución administrativa impugnada (veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) porque es hasta ese momento, no en la fecha de su emisión, que lo decidido en ella causó efectos en la esfera jurídica del inconforme; tan es así, que a partir de que le fue notificada, pudo impetrar su nulidad al conocer sus motivos y fundamentos.

Al caso es aplicable la tesis XX.2o.17 A sustentada en la Novena Época por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registro digital 180831; Tomo XX, Agosto de 2004; página 1647; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los términos siguientes:

"PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SE INTERRUMPE CON LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas no contempla hipótesis alguna en la cual el término de



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO CHIAPAS



la prescripción para imponer sanciones a los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidad pueda interrumpirse, por tanto, debe computarse de momento a momento, es decir, desde el día siguiente al en que se incurrió en responsabilidad o del momento en que hubiesen cesado los efectos de la conducta considerada como continua al tiempo en que se ubique la hipótesis en concreto. Ahora bien, de una interpretación armónica de los artículos 62, fracción II y 75 de la ley mencionada, se desprende, por una parte, que la autoridad debe practicar todas las diligencias pertinentes para definir la situación del servidor público; así, la Contraloría General de la entidad, una vez concluida la etapa de instrucción en un procedimiento administrativo, debe realizar dos actos procesales, a saber: el primero, dictar la resolución en la que determine si existe o no responsabilidad administrativa e imponer al infractor, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes, todo lo cual deberá realizarse dentro del término de tres meses o tres años, a que se refieren las fracciones I y II del citado artículo 75; y, el segundo, notificar la resolución al interesado, a su jefe inmediato, al representante designado por la dependencia y al superior jerárquico, dentro del plazo a que alude el invocado numeral 62; por consiguiente, la obligación de la autoridad administrativa no concluye con la emisión de la resolución, pues para ello es menester que ésta sea notificada a las partes, ya que este acto procesal da certeza de la fecha de emisión de la resolución, la cual será existente en términos jurídicos cuando las partes la conozcan y se encuentren en aptitud de determinar si ésta incide o no en su esfera jurídica, esto es, si su conducta ha sido o no constitutiva de una infracción y, en caso de que así suceda, se enterará de la sanción que se le impone; en consecuencia, el plazo para que opere la prescripción no será interrumpido con la emisión de la resolución sino con la notificación que de ésta se realice."

Tomando en cuenta que el concepto de nulidad analizado deviene fundado y suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa impugnada, se dejan de atender y dar respuesta a los restantes agravios, porque a ningún fin práctico conduciría, puesto que el resultado que persiguen todos, es el conseguido con lo alegado en el segundo.

Resulta aplicable, por analogía sustancial, la Jurisprudencia P./J.100/99 s, sustentada en la Novena Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo X, Septiembre de 1999; página 705; registro digital 193258; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con la redacción siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, situación que cumple el propósito de este juicio de nulidad de carácter constitucional, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos de queja relativos al mismo acto."

Congruente con lo expuesto, con fundamento en el artículo 159, fracción II, de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución pronunciada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve por el presidente del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el procedimiento administrativo HACTG/CM/DRQyD ■■■ 2016, que lo inhabilitó temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal por un lapso de tres años.

Por lo expuesto y fundado, este Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa;

Resuelve

Primero. Por los motivos y fundamentos expuestos en el Considerando III (tres) se **declara la nulidad lisa y llana** de la resolución pronunciada el veintiséis de junio de dos mil



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
CHIAPAS



diecinueve por el presidente del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el procedimiento administrativo HACTG/CM/DRQyDA [REDACTED] 2016, que lo inhabilitó temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal por un lapso de tres años.

Segundo. Notifíquese personalmente al actor [REDACTED] en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 112, fracción VI, de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas y, por oficio, a la autoridad demandada, presidente del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en términos del artículo 113, párrafo segundo, del mismo ordenamiento.

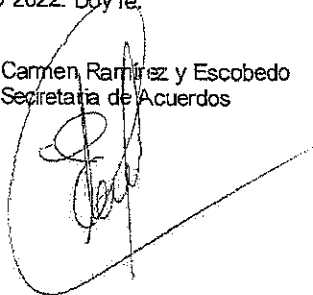
Tercero. En su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido.

Así lo resolvió y firma el ciudadano licenciado Elmar Mario Guirao Maldonado, Juez Especializado en Responsabilidad Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ante la licenciada Elodia del Carmen Ramírez y Escobedo, Primera Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

Expediente 559/2020

Con fundamento en los artículos 112 y 115, fracción III, de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas y 125 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, supletoriamente aplicado al primer ordenamiento, se publica esta resolución por lista autorizada del Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, la cual surtirá efectos al día siguiente de esta publicación. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 04 octubre de octubre del año 2022. Doy fe.

Lic. Elodja del Carmen Ramírez y Escobedo
Primera Secretaria de Acuerdos



12 ELEMENTOS ELIMINADOS. Justificación: Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial por ser vinculable a personas identificadas y/o identificables, asimismo, por encuadrar en los supuestos normativos previstos en la Constitución Política Federal y Local; así como los numerales: 120, 121, 129, fracción II, 139, y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

Fecha de clasificación: a los 11 días del mes de julio del año 2024.